ASUNTO: PUNTO DE ACUERDO

C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO PRESENTE

Los suscritos Diputados **Gretel Culin Jaime, Luis Fernando Antero Valle, Francisco Javier Rodríguez García**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de acuerdo para citar a la Auditora Superior del Estado para que informe y detalle si efectivamente existe la obligación por parte del Poder Judicial del Estado de otorgar cantidad alguna al Fondo para la Atención a Víctimas del Delito, derivado del cobro de multas y sanciones económicas, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla, en su artículo 1o., la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas.

La reforma constitucional mexicana de 18 de junio de 2008, se hizo un reconocimiento expreso a los derechos de las personas en situación de víctimas en su artículo 20, apartado C.

En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, la Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985, relativa a los Derechos sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder, y la Resolución 60/147 de 16 de diciembre de 2005, relativa a los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las

Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, ambas aprobadas por la Asamblea General de las Organización de las Naciones Unidas, señalan el trato y respeto a la dignidad y derechos humanos que debe dárseles a las personas en situación de víctimas, así como la adopción de diversas medidas para garantizar su seguridad, bienestar físico y psicológico

Este debería ser la atención integrar para todas aquellas personas que han sido víctimas del delito, existiendo la percepción que no se da una debida atención a las mismas, siendo doblemente victimizadas, esto toda vez que en el Estado no existe constituido el fondo para la atención a Víctimas y la atención depende de la Secretaria General de Gobierno, siendo necesario que esto cambia, pero eso será motivo de una reforma integral que en futuro la suscrita presentare.

Ahora bien, el artículo 32 del Código Penal Estatal considera entre otras como penas y medidas de seguridad, la multa y la sanción económica, entendiendo como multa el pago de una cantidad determinada de dinero al Estado fijada mediante el esquema días de salario mínimo vigente en la entidad.

Por su parte el artículo 44 del Código Penal para el Estado de Colima establece:

“El importe de la multa y la sanción económica impuestas se destinará, en primer lugar, a la reparación del daño ocasionado por el delito. En el caso de que ésta se haya cubierto o garantizado, el importe se destinará equitativamente al Fondo para la Atención a Víctimas del Delito y al Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia.”

Motivo por el cual, y ante la necesidad de crear herramientas que coadyuven para garantizar a todas a aquellas personas que fueron sujetos pasivos en la comisión de un delito, es que resulta procedente citar en primer término al Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, para que dé a conocer detalladamente la cantidad que se obtuvo en el año 2017 y en lo que va de este año 2018, por concepto de multa y sanción económica por la comisión de

delitos, y el cumplimiento a lo estipulado en el artículo 44 del Código Penal para el Estado de Colima, de igual manera al Secretario General de Gobierno del Estado y al Director General de la Comisión Ejecutiva Estatal, para que de forma detallada, dé a conocer el manejo que se ha dado a dicho fondo, las necesidades y problemática en la atención de víctimas de delito.

El pasado martes 03 de diciembre de la anualidad, fui abordada, por ciudadanos preocupados por el tema de la atención a víctimas de delitos y falta de operatividad en el Estado e incluso insisten en la obligación del Poder Judicial de contribuir al Fondo de Atención de Víctimas en el Estado, siendo importante recalcar que derivado de un punto de acuerdo aprobado con anterioridad, fue citado el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien ha insistido que no existe obligación alguna para el Poder Judicial de otorgar una parte de lo que se obtiene por la imposición de multas y sanciones económicas, y que por eso motivo no se ha hecho contribución al citado fondo, motivo por el cual ante la discrepancia de criterios resulta necesario citar a la Auditora Superior del Estado para que informe y detalle si efectivamente existe la obligación por parte del Poder Judicial del Estado de llevar a cabo esta aportación y en caso de ser así, a cuánto asciende la cantidad que se debió aportar e incluso la viabilidad de denunciar dichos hechos.

Por lo antes expuesto es que se pone a consideración del pleno el presente punto de

ACUERDO

UNICO. Se cita a una reunión de trabajo a la titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima (Osafig), para que informe y detalle si efectivamente existe la obligación por parte del Poder Judicial del Estado de llevar a cabo aportación al Fondo para la Atención a Víctimas del Delito y en caso de ser así, se realice un auditoria excepcional y a fin de que se

determine la cuantía que debió aportar el poder judicial y se presenten las denuncias necesarias por actos de corrupción.

Solicitando se ponga a consideración del pleno la aprobación del presente punto de acuerdo, y una vez aprobado el presente, se cítese a la autoridad señalada para que comparezca a reunión de trabajo para los efectos conducentes.

ATENTAMENTE

Colima, Col. diciembre de 2019.

Dip. Gretel Culin Jaime

Dip. Luis Fernando Antero Valle

Dip. Francisco Javier Rodríguez García

ASUNTO: PUNTO DE ACUERDO

C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO PRESENTE

La suscrita Diputada **Gretel Culin Jaime**, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84fFracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, someto a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de acuerdo para citar a la Auditora Superior del Estado para que informe y detalle si efectivamente existe la obligación por parte del Poder Judicial del Estado de otorgar cantidad alguna al Fondo para la Atención a Víctimas del Delito, derivado del cobro de multas y sanciones económicas, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla, en su artículo 1o., la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas.

La reforma constitucional mexicana de 18 de junio de 2008, se hizo un reconocimiento expreso a los derechos de las personas en situación de víctimas en su artículo 20, apartado C.

En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, la Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985, relativa a los Derechos sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder, y la Resolución 60/147 de 16 de diciembre de 2005, relativa a los Principios y Directrices

Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, ambas aprobadas por la Asamblea General de las Organización de las Naciones Unidas, señalan el trato y respeto a la dignidad y derechos humanos que debe dárseles a las personas en situación de víctimas, así como la adopción de diversas medidas para garantizar su seguridad, bienestar físico y psicológico

Este debería ser la atención integral para todas aquellas personas que han sido víctimas del delito, existiendo la percepción que no se da una debida atención a las mismas, siendo doblemente victimizadas, esto toda vez que en el Estado no existe constituido el fondo para la atención a Víctimas y la atención depende de la Secretaria General de Gobierno, siendo necesario que esto cambia, pero eso será motivo de una reforma integral que en futuro la suscrita presentare.

Ahora bien, el artículo 32 del Código Penal Estatal considera entre otras como penas y medidas de seguridad, la multa y la sanción económica, entendiendo como multa el pago de una cantidad determinada de dinero al Estado fijada mediante el esquema días de salario mínimo vigente en la entidad.

Por su parte el artículo 44 del Código Penal para el Estado de Colima establece:
“El importe de la multa y la sanción económica impuestas se destinará, en primer lugar, a la reparación del daño ocasionado por el delito. En el caso de que ésta se haya cubierto o garantizado, el importe se destinará equitativamente al Fondo para la Atención a Víctimas del Delito y al Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia.”

Motivo por el cual, y ante la necesidad de crear herramientas que coadyuven para garantizar a todas a aquellas personas que fueron sujetos pasivos en la comisión de un delito, es que resulta procedente citar en primer término al Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, para que dé a conocer detalladamente la cantidad que se obtuvo en el año 2017 y en lo que va de

este año 2018, por concepto de multa y sanción económica por la comisión de delitos, y el cumplimiento a lo estipulado en el artículo 44 del Código Penal para el Estado de Colima, de igual manera al Secretario General de Gobierno del Estado y al Director General de la Comisión Ejecutiva Estatal, para que de forma detallada, dé a conocer el manejo que se ha dado a dicho fondo, las necesidades y problemática en la atención de víctimas de delito.

El pasado martes 03 de diciembre de la anualidad, fui abordada, por ciudadanos preocupados por el tema de la atención a víctimas de delitos y falta de operatividad en el Estado e incluso insisten en la obligación del Poder Judicial de contribuir al Fondo de Atención de Víctimas en el Estado, siendo importante recalcar que derivado de un punto de acuerdo aprobado con anterioridad, fue citado el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien ha insistido que no existe obligación alguna para el Poder Judicial de otorgar una parte de lo que se obtiene por la imposición de multas y sanciones económicas, y que por eso motivo no se ha hecho contribución al citado fondo, motivo por el cual ante la discrepancia de criterios resulta necesario citar a la Auditora Superior del Estado para que informe y detalle si efectivamente existe la obligación por parte del Poder Judicial del Estado de llevar a cabo esta aportación y en caso de ser así, a cuánto asciende la cantidad que se debió aportar e incluso la viabilidad de denunciar dichos hechos.

Por lo antes expuesto es que se pone a consideración del pleno el presente punto de

A C U E R D O

UNICO. Se cita al Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a una reunión de trabajo a celebrar el próximo a la titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig). para que informe y detalle si efectivamente existe la obligación por parte del Poder Judicial del Estado de llevar a cabo aportación al Fondo para la Atención a víctimas del delito y en caso de ser así, se realice un auditoria excepción y a fin de que se determine la cuantía

que debió aportar el poder judicial y se presenten las denuncias necesarias por actos de corrupción.

Solicitando se ponga a consideración del pleno la aprobación del presente punto de acuerdo, y una vez aprobado el presente, se cítese a la autoridad señalada para que comparezca a reunión de trabajo para los efectos conducentes.

ATENTAMENTE

Colima, Col. diciembre de 2019.

Dip. Gretel Culin Jaime